

SECUESTROS AEREOS

EL episodio de secuestro aéreo que ha terminado en Barajas y partió de Estocolmo se ha saldado bien. Podría haber sido igual de acertada la actuación de la autoridad —según los informes que de ella misma parten— y haberse saldado mal. Con catástrofe. Porque este tipo de sucesos llevan potencialmente unas posibilidades de muerte, de destrucción, que muy fácilmente pueden dispararse más allá de la voluntad de los propios actores, de los mismos secuestradores o de la autoridad, que se encuentra de pronto con una situación y debe pactar, negociar o asaltar y disparar, según los casos y la repentización del momento. Uno de los factores que han contribuido al buen fin ha sido, sin duda, el hecho de que los croatas que habían sido protagonistas del suceso habían elegido España como meta final, como punto de asilo político: creían que su lucha contra Tito les caracterizaba como anticomunistas, y que esto les permitiría encontrar una simpatía oportuna en las autoridades españolas. Los croatas mantienen un movimiento separatista desde que fueron integrados (con otras etnias balcánicas) en el Reino de Yugoslavia. Dentro de Croacia, un grupo —el de Ante Pavelic, los «ustachis»— inició ya unas operaciones de terrorismo. Fueron fascistas, colaboraron con Italia, declararon la independencia de Croacia al amparo de la ocupación del Eje, eligieron Rey de Croacia a un duque italiano —que jamás visitó el territorio— y lucharon duramente con las guerrillas de la resistencia que se enfrentaban con la ocupación, tanto con las monárquicas del general Mihailovich como con las comunistas de Tito. En España hay exiliados croatas (ustachis) desde que el Eje perdió la guerra, algunos que han venido después y otros de otros grupos políticos. De esta cepa son los croatas que ocupaba el avión de la SAS. Acababan de canjear en Estocolmo los pasajeros del avión por un grupo de terroristas croatas que estaban en la cárcel acusados del asesinato del embajador de Yugoslavia en Suecia. Creyeron que España sería su tierra de asilo.

PROBABLEMENTE se equivocaron. La cuestión está aún —cuando escribo— en manos de un juez; será él, sin duda, quien habrá de determinar si accede o no a las peticiones de extradición del Gobierno sueco. No parece que tenga muchas opciones. España se ha mostrado siempre como muy contraria a todas las formas de secuestro aéreo y de terrorismo en general; los «ustachis» croatas tienen detrás de sí una importante estela de delitos como para no atender las peticiones de extradición. La cuestión del asilo político —que siempre es muy respetable y muy considerable— se complica, sin duda, por el hecho de que no es el país de origen el que les reclama (aunque también pudiera hacerlo) por razones políticas, sino un tercer país, por delito común. Si en Yugoslavia los terroristas croatas están perseguidos por su oposición política, en Suecia sólo lo están por asesinar a unos, por secuestro y amenazas (incluso con la obtención de una importante cantidad de dinero, medio millón de coronas suecas), o sea, por delito común. Quizá pudieran ser también juzgados en España, en vista de que una parte de su delito ha sido cometida aquí, y de que el convenio aprobado por las Cortes en junio pasado lo autoriza así. Es una serie de cuestiones más bien complejas, a las que la justicia española deberá dar respuesta.

LA misma complejidad de este caso, en el que se mezclan elementos históricos y actuales, políticos y comunes, tres países y la presión natural de los organismos interesados en la represión de los secuestros aéreos —las asociaciones internacionales de pilotos y las de aviación civil—, aun teniendo en cuenta la feliz levedad en que ha terminado, es una muestra de la dificultad de soluciones generales para el problema del secuestro aéreo y del terrorismo. Vivimos en unas sociedades vulnerables. La misma naturaleza de la civilización tecnológica en que vivimos lo hace así. Un avión es perfectamente frágil. Una central eléctrica, un oleoduc-

Dos de los prisioneros croatas durante su traslado de la prisión al aeropuerto de Malmö (Suecia), de donde emprenderían vuelo a Barajas en el avión secuestrado.



UNA GUERRA: UGANDA-TANZANIA

to, un depósito de gas, un grupo de rehenes, unos diplomáticos son puntos fácilmente atacables. Unas respuestas blandas al terrorismo o al chantaje con rehenes pueden, como se ha dicho ya infinitas veces, aumentar el número de estos actos, en vista de que compensan. Una respuesta dura puede traer una tragedia como la de Munich. La responsabilidad recaerá siempre sobre quienes realicen la respuesta dura. No olvidemos que el terrorista o el secuestrador se encuentra más allá de la moral, pero la autoridad no lo puede estar nunca, porque precisamente actúa en nombre de ella. Los agentes terroristas utilizan precisamente ese juego: atacan a sus enemigos en un terreno que desborda la moral convencional. Para el terrorista no existen más inocentes que los suyos propios: todos los demás son o somos culpables. Los croatas, nazis o no, pueden tener una lógica propia para considerar que el mundo viene asistiendo de una manera impasible al dominio de una entidad nacional, bien por Hungría, por Austria, por el Pacto de Corfú, por la creación de Yugoslavia; todo ello con la anuencia del mundo y con su colaboración en los altos organismos internacionales. Como los palestinos pueden perfectamente sentir culpable al mundo entero —con inclusión de algunos de sus hermanos árabes— de su tragedia de un cuarto de siglo. Su moral propia parte de que no hay inocentes, no hay marginados, todos son sus enemigos. Pero la moral establecida se basa precisamente en una elevada consideración del inocente y precisamente en exculpación del mayor número posible de personas de cualquier situación en la que no hayan intervenido directamente. Una cesión en este último valor, y el terrorismo se encontrará cada vez más justificado. Los bombardeos y la invasión del Líbano por parte de Israel ha causado un enorme número de muertos civiles: causadas por armas legales, por aviones y soldados, utilizados en tiempo de tregua, esta huida de la moral que esas armas regulares están llamadas a defender es particularmente grave.

La cuestión política es otro punto vulnerable de las sociedades. El ejercicio del terrorismo, como se sabe y se comprueba, no está limitado a un solo campo político ni a un grupo de pueblos. El tema croata lo confirma. Imaginemos que un grupo de judíos de la Unión Soviética secuestra un avión y consigue llevarlo a los Estados Unidos o a Israel. ¿Serían devueltos a su país de origen por estos países que figuran ahora a la cabeza de las naciones que combaten contra el terrorismo aéreo? Ni aun otros países menos marcados en el tema del oriente árabe o en su amistad a los pueblos judíos tomarían fácilmente una decisión así. Algunas consideraciones de este tipo contienen a muchos Gobiernos a la hora de tomar decisiones. La convención de La Haya propone leyes de extradición y de entrega inmediata a la justicia de todos los secuestradores aéreos. No fue aprobada más que por ochenta y cuatro Gobiernos —aproximadamente, algo más de las dos terceras partes de todos los del mundo—; pero sólo cuarenta la han ratificado en los dos años largos transcurridos: algo menos de una tercera parte de todos los del mundo.

ESTAS vacilaciones son las que han movido a los pilotos civiles y a la Organización Internacional de Aviación Civil a proponer y a intentar medidas por su cuenta, tales como considerar que los países que «pongan en peligro la seguridad aérea, por el hecho de dar refugio a los secuestradores sean sancionados negando el derecho a sus aviones nacionales a aterrizar en otros países o incluso la de negarse a volar hacia sus aeropuertos. La mayor parte de los grandes países se niegan a aceptar esta fórmula, por una razón de principios: una asociación privada que representa unos intereses determinados no puede ejercer una especie de justicia mundial. Se consideraría como una cesión de las autoridades nacionales. Y, en el fondo, por la misma razón enunciada antes: porque pocos países están seguros de que por alguna razón sentimental, nacional o simplemente por evitar problemas de orden público interiores no tendrán alguna vez que acoger refugiados secuestradores en su territorio. Las opiniones públicas, aun sintiéndose amenazadas por los secuestradores, son muy sensibles a las entregas, sobre todo en casos políticos. El Gobierno inglés ha sido muy severamente criticado, desde todos los bandos, por la entrega de los militares marroquíes que se refugiaron en Gibraltar tras el atentado contra Hassan II.

La «manera dura» no ha dado resultado. El Presidente Nixon creó un cuerpo especial para la represión de los atentados aéreos: no ha podido evitar que los Estados Unidos continúen siendo la nación más secuestrada. Tampoco los agentes especiales de Israel han conseguido lo que se proponían; y los «tiradores especiales» de Alemania Federal, en Munich, dieron el resultado que todos sabemos. Otras medidas menores parecen ridículas, como la exigencia de visados especiales para ciudadanos de países árabes o los registros en los aeropuertos. Los profesionales del terrorismo pasan fácilmente las fronteras y embarcan sus armas, a pesar de todos los medios de detección modernos; en cambio, se causan molestias infinitas y dificultades a los ciudadanos ajenos a todo ello.

La solución de resolver los problemas de terrorismo por la eliminación de los problemas nacionales, internacionales o políticos que crean estas castas de desesperados no parece que se haya cruzado por un momento por las mentes rectoras del mundo (a no ser, vagamente, por Waldheim; que no será escuchado). Es la más difícil. Es la única posible.

El mes pasado, el general Amin, Presidente de Uganda, dirigió un extraño telegrama a Julius Nyerere, Presidente de Tanzania: «Con estas breves palabras quiero asegurarle a usted que le amo mucho y que si usted hubiese sido mujer hubiese deseado casarme con usted, a pesar de que su cabeza está cubierta de cabello gris; pero como es usted un hombre, la oportunidad no existe». Ahora, los dos Presidentes, los dos países, están en guerra. Al menos, Uganda acusa a Tanzania de haber intentado una invasión de su territorio, con dirección a la capital, Kampala. Tanzania asegura que no hay tal invasión, sino que hay una sublevación ugandesa dirigida contra Amin, por un «Ejército Popular». Las dos cosas no son incompatibles. Tanzania acogió al Presidente Milton Obote cuando fue derribado por Amin, y a un importante número de ugandeses exiliados, que podrían haber constituido ese Ejército Popular; y no sería extraño que tuviesen un cierto apoyo por parte de Tanzania. Amin no se detiene en sus acusaciones: la Gran Bretaña estaría detrás de esta operación, que ha comenzado precisamente el día en que se iniciaba la expulsión de los asiáticos con pasaporte británico.

En los primeros días de este mes se difundió un comunicado del Consejo de Seguridad de Uganda en el que se denunciaba un complot organizado por el Gobierno británico, con el de Israel —Amin ha expulsado a los judíos de Uganda, y hace unos días ha publicado una de sus delirantes declaraciones diciendo que «Hitler tenía razón» al asesinar a los judíos— y con algunos otros Gobiernos occidentales —que no citaba— para asesinar a Amin y situar otro en su puesto. El plan consistiría en provocar desórdenes en el interior, de forma que los británicos pudiesen enviar tropas con el pretexto de proteger las vidas de los ciudadanos británicos —hay unos siete mil británicos en el país—, pero en realidad, para cambiar el régi-

men. Algunos de los británicos presentes ahora en Uganda han sido detenidos, otros están en prisión en sus propias casas o habitaciones de hotel. Entre los detenidos por Amin figuran todos los periodistas de nacionalidad británica.

La Gran Bretaña rechaza ahora toda complicidad en el movimiento subversivo contra el general Amin, igual que Tanzania. Sin embargo, si los súbditos extranjeros fueran objeto de persecuciones excesivas —lo cual no sería extraño— se estudiaría alguna clase de intervención.

Una de las versiones que circulan más frecuentemente en el mundo occidental estos días es la de que el gigantesco general Amin está loco. Sus telegramas y sus declaraciones ofrecen un estilo tan pintoresco y tan desusado en las relaciones internacionales, y sus actos son tan desmesurados, que dejan lugar a esa explicación. Otros observadores creen que la expulsión de los asiáticos y otras medidas de ese tipo tienen por objeto derivar la tensión de su pueblo hacia supuestos enemigos internacionales, en lugar de a los concretos problemas que tiene el país, y que son muchos. Principalmente, el económico, el del nivel de vida y el del desorden y la anarquía que no ha conseguido evitar a pesar de la dureza de sus medidas de represión.

Cuando se escriben estas líneas —el lunes— la situación es confusa. Hay noticias de combates encarnizados; las calles de Kampala están llenas de camiones de tropas y de tanques y coches blindados, y los europeos han recibido la orden de no moverse de sus domicilios.

Uganda es un país sin estabilidad desde que adquirió la independencia. No sólo hay aún partidarios de Milton Obote, sino del Rey Mutesa II, de Buganda, que fue derribado por éste. Las diferencias tribales son considerables, y el sistema de federación no ha conseguido resolverlas.